

Chile: ¿ Acordando o acortando plazos?

Irene Geis

Irene Geis: Periodista chilena. Colaboradora de varias publicaciones nacionales y extranjeras.

El bloque conocido como Acuerdo Nacional para la Transición a una Plena Democracia tiene para sus adherentes el mérito de haber repuesto en primer plano la posibilidad de una salida política hacia la democracia y su fracaso acelerará una creciente polarización que a su vez internacionalizará el "caso Chile".

Dicho bloque fue concebido por el Cardenal Francisco Fresno, quien invitó a todos los partidos políticos excepto los marxistas-leninistas, junto con una comisión de laicos de su confianza, para que limaran las asperezas y encontraran el ambiguo punto de equilibrio que permitió la firma de conservadores, liberales, democristianos, socialdemócratas, radicales, sectores socialistas y cristianos de izquierda.

El marxismo-leninismo, agrupado a nivel nacional en el Movimiento Democrático Popular (MDP) excluido de las conversaciones, acaba de obtener en las elecciones universitarias más importantes del país un virtual triunfo al obtener el segundo lugar separado de la triunfante democracia cristiana por setenta y siete votos, no siendo ésta la única paradoja de la cada día más pantanosa política chilena.

Para Ricardo Lagos, un economista de 48 años, adherente del Acuerdo Nacional en representación de un sector del Partido Socialista, la paradoja mayor reside en la profundidad de la crisis económica que favorece al gobierno y que, por ende, éste no desea solucionar, además del hecho que en la oposición coexisten dos proyectos que desde las antípodas se debaten con mucha fuerza.

PINOCHET SE APROVECHA DE LA CRISIS

El diagnóstico de Lagos, considerado en los inicios de la década del 70 como un posible sucesor del presidente Salvador Allende, parte de la orfandad política del general Pinochet, desde el momento en que las principales figuras de la derecha política, que lo acompañaron incondicionalmente durante los últimos doce años, aceptaron la invitación de Fresno y concluyeron por firmar el Acuerdo Nacional. La soledad pinochetista, sin embargo, tiene su contrapartida no sólo en el apoyo de las armas sino en la crisis económica que le otorga al dictador el poder de salvar a

la burguesía endeudada y descapitalizada.

La burguesía, la derecha económica como la llama la clase política, confía más en Pinochet que en un acuerdo táctico que concede el futuro poder a desconocidos políticos que, como en el caso de la poderosa democracia cristiana, conserva residuos estatistas y podría, presionada por su clientela electoral, ceder a la tentación de reseñar al Estado industrias, bancos y propiedades agrícolas que hoy están en sus manos por la vía de la deuda interna.

El presidente de la poderosa Confederación de la Producción y del Comercio, Jorge Fontaine, por ejemplo, resumió la situación del sector empresarial frente al Acuerdo Nacional al confidenciar a uno de sus firmantes que él deseaba saber si sus activos serían algún día patrimonio de sus nietos o de sus acreedores. Si la crisis económica no fuera tan profunda, resumió Fontaine, sus opiniones políticas públicas podrían ser más libres.

En consecuencia, dice Lagos, el gobierno no está interesado en solucionar la crisis económica que le permite retener la angustiada adhesión de la burguesía y cita el caso del Banco de Concepción, intervenido en enero de 1983 cuando la quiebra era inminente. Semanas atrás un grupo de empresarios argentinos ofreció por ese banco 8 millones de dólares en billetes y el gobierno se negó a considerar la oferta o hacer incluso una contraoferta.

ADHESIONES QUE MATAN

En la oposición, o mejor dicho en las oposiciones, el margen de la añosa discusión en torno al problema de las vías (el derecho a rebelión, sin descartar el uso de la violencia legitimado por el PC a partir de 1980, versus "la vía pacífica") el debate tiene una nueva dimensión desde que la derecha firmó el acuerdo y cree posible restablecer para el Chile post Pinochet un capitalismo a ultranza, encabezado por el conservador Movimiento de Unidad Nacional (MUN) o el Partido Nacional (PN), mientras que el MDP cree posible - dada la magnitud de la crisis - retomar el camino hacia el socialismo que inició Allende y profundizarlo aún más.

El MUN, que lidera un abogado de 35 años, Andrés Allamand, a quien los liberales definen como "un engendro del Departamento de Estado", y sus socios derechistas del PN obtuvieron un distante tercer lugar en las recientes elecciones universitarias. Pero al margen de las cifras que proyectadas a nivel nacional los reducirían más aún, valoran como decisiva su participación en el Acuerdo, donde creen tener la llave que abre la puerta de la burguesía y de las fuerzas armadas y están cobrando un precio muy alto por su "valiosa adhesión".

El precio, la derechización constante del Acuerdo traducida en la prohibición a la democracia cristiana de formalizar acuerdos electorales con el MDP, la exigencia de exclusión del marxismo en la futura vida política del país, mayores garantías aún que las que ya establece el Acuerdo para la propiedad privada y el manto del

olvido para las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en los últimos doce años, pone en peligro la existencia misma del Acuerdo y amenaza con debilitar a los restantes socios, fundamentalmente la DC.

Estos últimos, equidistantes del capitalismo a ultranza y de un nuevo proyecto socialista, buscan en cambio una "salida nacional" que requiere como mínimo un apoyo popular de un ochenta por ciento del país al mismo tiempo que - con los ejemplos de Perú, Uruguay, Argentina y Brasil citados reiteradamente - dicen que aún no es el tiempo de discutir quién será gobierno y quién oposición en el hipotético caso de que logren convencer a las fuerzas armadas para que entreguen el poder - o al menos a Pinochet - en 1989, de acuerdo a la Constitución que el propio Pinochet dictó a su exacta medida en 1980.

En líneas generales, la Constitución establece que a fines de 1988 la Junta de Comandantes en Jefe debe designar un candidato para reemplazar a Pinochet y que este nombre será sometido a plebiscito en marzo de 1989. En caso de que el candidato designado - el propio Pinochet presumiblemente - pierda el plebiscito, el general dispondrá aún de un plazo de doce meses más para convocar a elecciones teóricamente libres. Si algún civil lograra superar todas estas vallas, aún tendría que gobernar con una Constitución que es inmodificable, con un parlamento parcialmente designado por Pinochet y el veto militar de un Consejo de Seguridad Nacional.

Renunciar a todo esto en favor de la democracia equivale para las fuerzas armadas al suicidio, porque así como la burguesía se ve forzada a seguir a Pinochet para asegurar su existencia de clase, los militares saben que su destino - no institucional, pero sí personal - está ligado a la dictadura y a la persona del dictador, el único que puede impedir el desarrollo de procesos como los de Argentina.

ELECCIONES DE LA FECH: RECHAZO A ALIANZAS EXCLUYENTES

La reciente elección de dirigentes en la Universidad de Chile, la mayor del país, donde votaron 17 mil alumnos, viene a poner algo de claridad en la discusión que las cúpulas políticas acostumbra a tener en el nebuloso plano de la retórica, donde cada partido, cada clase y cada grupo se adjudica voluntariosamente la representación mayoritaria del voto popular.

El año pasado, recién naufragado el proyecto de desestabilización del régimen por la vía de las movilizaciones populares de 1983 y el intento de diálogo entre la Alianza Democrática y el entonces ministro del Interior Onofre Jarpa, la DC se presentó a las elecciones universitarias en alianza con el MDP y el bloque socialista. Tras el obvio triunfo opositor, la votación mostró una democracia cristiana que prácticamente dobló la votación comunista (4.428 contra 2.270). Este año, y después que el derechista MUN vetara la coalición DC-MDP, el resultado fue un virtual empate y un espectacular avance comunista (5.670 sufragios contra 5.573 MDP), que dio a estos últimos el 30 por ciento de la preferencia estudiantil.

La derecha también registró un incremento de su caudal electoral, dejando en incómoda situación a la triunfante DC y muy especialmente al Bloque Socialista que superó apenas los mil votos.

En el Consejo de Vocales, una especie de parlamento que acompaña a la directiva universitaria no reconocida por el rector militar, el MDP obtuvo nueve consejeros sobre ocho de la DC.

La importancia que se atribuye a esta elección - al margen del carácter elitista del medio donde se registra, conformado por hijos de la burguesía y de la pequeña burguesía - se explica por el hecho de ser precisamente la única que permite tener una aproximación al pensamiento político del país y proyectarlo a nivel nacional. Su resultado, así visto, resulta alarmante para las pretensiones de la burguesía de mantener un capitalismo salvaje e incluso para los más moderados sectores medios que pugnan por un capitalismo sedado por algún grado de participación estatal y de distribución más equitativa de la riqueza. Proyectada a nivel nacional - y sobre el supuesto que en una escala social descendente mayor será la votación de la izquierda - la elección de la Universidad de Chile cuestiona la política de alianzas privilegiada por la DC, a espaldas de la realidad nacional.

El resultado de la elección puede explicarse precisamente por un rechazo de la base a los pactos que en la cúpula la DC formaliza con la derecha.

Este tipo de acuerdos, que en 1964 evitó el triunfo electoral de Salvador Allende y en 1973 abrió las puertas al golpe militar, hizo decir ya una vez a Radomiro Tomic - figura relevante de la DC y su candidato presidencial en 1970 - que cuando la DC se une a la derecha es esta última la que resulta siempre vencedora.

El universo estudiantil parece, en cambio, haber privilegiado la tesis del MDP de esforzarse al máximo por la unidad más amplia de la oposición, sin exclusiones, sin dejarse arrastrar a una discusión sobre el problema de las vías, solamente en lucha frontal contra el gobierno y desconfiando de eventuales negociaciones con Pinochet, aun cuando sean respaldadas por el Vaticano y el Departamento de Estado. La gestión norteamericana de apoyo a la negociación se inició a comienzos de año con la visita del entonces subsecretario Langhorne Motley y se ha intensificado bajo la gestión de su sucesor, Elliot Abrams.

En las últimas semanas, tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron acuerdos de apoyo al Acuerdo Nacional y el encargado de negocios en Chile, George Jones - a la espera de la llegada del nuevo embajador Harry Barnes - ha dicho que si bien las votaciones parlamentarias de su país no tienen carácter obligatorio para Chile, deberán ser "seriamente tomadas en cuenta" por el gobierno nativo.

Por otra parte, el hecho de que Barnes haya prestado el juramento de rigor para asumir su nuevo cargo - inusualmente - ante el presidente de la Corte Suprema de

Estados Unidos, ha sido interpretado por la prensa local como otra forma de presión y Barnes es visto por el gobierno de Pinochet como una figura hostil que dejará de lado la tradicional "diplomacia silenciosa" de Reagan por una nueva locuacidad de la que ya está dando pruebas Jones.

EE.UU. Y EL VATICANO TEMEN "SALVADORIZACION" DEL PAIS

La tesis norteamericana no pretende restar apoyo a Pinochet ahora, pero afirma en cambio que éste debe ceder el paso a los firmantes del Acuerdo Nacional en 1989, en el bien entendido que logren cohesionarse como bloque opositor y garanticen un recambio pacífico y democrático-burgués, como única fórmula para evitar la "salvadorización" del país, inevitable según el Departamento de Estado, de prolongarse indefinidamente la situación actual.

El Papa Wojtila a su vez, gestor del acuerdo a través del Cardenal Fresno y de una campaña religiosa a favor de la "reconciliación nacional", ha comprometido su visita a Chile en marzo de 1987, pero ha puesto condiciones. El gobierno deberá comprometerse con la Iglesia a aprobar antes de esa fecha un paquete de leyes políticas que demuestran la intención oficial de avanzar hacia una transición a la democracia y que incluye la formación de un nuevo registro electoral, inexistente desde que el original fuera incinerado después del golpe militar de 1973, so pretexto de que estaba adulterado.

El Papa comparte así los temores norteamericanos sobre el poco tiempo y el pequeño espacio que el país estaría reservando para el capitalismo en cualquiera de sus expresiones. Las señales tal vez no sean demasiado visibles a simple vista, pero bastan para los norteamericanos. Entre otras - y aparte de los resultados electorales escasos, pero siempre desfavorables a cualquier expresión que vaya desde el centro hacia la derecha - el Departamento de Estado cita el progresivo y sostenido incremento de hechos de violencia con su correlato de indiferencia en la población frente a ellos. Las piernas mutiladas de una mujer por el estallido de una bomba, los senos quemados de una estudiante (con una plancha y por agentes de seguridad del gobierno) o la cabeza destrozada de un oficial de policía que intentó impedir el asalto de una poblada hambrienta a un supermercado, conmueven cada día menos a una masa que se inició en el conocimiento de la tortura masiva hace doce años y cuya principal preocupación es sobrevivir con salarios promedios de 100 dólares mensuales y una cesantía siempre bordeando el 30 por ciento de la fuerza laboral.

El interés norteamericano se centra, además, en el movimiento sindical, que con sus huestes diezgadas por la desocupación y un proceso de "lumpenización", comienza a manifestarse. A comienzos de noviembre se registraron los primeros paros nacionales de los obreros portuarios, al mismo tiempo que se registraba aumento de la agitación en sectores clave como el petrolero y el cuprífero. La relativa debilidad del movimiento sindical hoy, que luchó moderadamente por la libertad de sus dirigentes encarcelados en octubre, no impide a quienes tienen

puesta la vista en el siglo XXI, calcular la posible reacción del sector una vez que se remueva la lápida de miedo que hoy lo paraliza, como asimismo el atractivo que sobre la juventud cesante ejercen los partidos tradicionales de la izquierda e incluso - o tal vez más aún - el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su organización de milicias.

Finalmente, los norteamericanos temen que Pinochet, obsesionado por su idea de ingresar a la historia como el brazo vengador del occidente cristiano, esté no solamente dispuesto sino que incluso ansioso por debilitar y agorar al centro político para enfrentarse militarmente al marxismo así como él se lo imagina.

La apuesta de 1989 con su hipotética disposición de las fuerzas armadas para sentarse a una mesa de diálogo no parece fácil, aunque incluye la creencia de que la fuerza aérea y la policía de Carabineros estén dispuestos a apoyarla. El propio Ricardo Lagos admite que el Acuerdo Nacional, imposibilitado para recurrir a la movilización de masas por el veto derechista, tiene la obligación de encontrar antes de marzo de 1986 una fórmula para presentar al país que mantenga su fe en alto y evite el quiebre del Acuerdo y una nueva escalada en la polarización nacional.

Pero esa fórmula parece difícil de encontrar para una coalición opositora que quiere ignorar al 30 por ciento de la izquierda y que a su vez es menospreciado por la burguesía. En definitiva, un consenso no demasiado amplio y excesivamente pasivo, donde el control financiero está en manos de la burguesía y el de las masas - parte al menos - en las del excluido MDP.

Por ahora, el Acuerdo ha renunciado a la idea de intentar derrocar a Pinochet antes de 1989 y quiere convencerse a sí mismo y al país de que este año habrá plebiscito y que allí, en esas urnas que todavía controlará el gobierno, será posible derrotar a Pinochet.